



# WRM BOLETIN

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales



[Versión imprimible](#) | [Suscripción gratuita](#) | [Números anteriores](#)

también disponible en [francés](#), [potuqués](#) e [inglés](#)

**número 110 - Setiembre 2006**

Estimad@s amig@s:

Quisiéramos resaltar que la sección de este boletín titulada "Árboles Genéticamente Modificados" incluye un importante pedido de acción para exigir a la Convención sobre Biodiversidad que prohíba los árboles transgénicos. Nos gustaría invitar a tod@s ustedes a adherirlo!

Desde ya muchas gracias por su apoyo.

## NUESTRA OPINIÓN

- [Día Internacional contra los monocultivos de árboles](#)

## COMUNIDADES Y BOSQUES

- [Brasil: campaña internacional contra la violencia rural en la Amazonía](#)
- [Cuenca del Congo: financiación internacional para apoyar madereo oligárquico](#)
- [Laos: la madera certificada por el FSC es ilegal](#)
- [Nicaragua: minería en la Reserva de Biosfera del Sureste](#)

## COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

- [Brasil y Uruguay: las promesas de Stora Enso y la dura realidad](#)
- [Camboya: los impactos de las plantaciones de pino en la provincia de Mondolkiri](#)
- [India: la nueva Política Nacional Forestal ¿abrirá la puerta a los árboles GM?](#)
- [Indonesia: expertos del Banco Mundial y el WWF buscan nuevas formas de subsidiar plantaciones](#)
- [Perú: los depredadores de ayer y de hoy, de la deforestación a las plantaciones](#)
- [Sudáfrica: impactos diferenciados de las plantaciones de árboles sobre las mujeres](#)

## LO PEOR EN CERTIFICACIÓN DE PLANTACIONES

- [PEFC: respaldo a sistemas de certificación no creíbles en el Sur](#)
- [Brasil: el programa de certificación CERFLOR no merece la más mínima credibilidad](#)
- [Chile: ¿tiene algún valor el sello CERTFOR?](#)

## ÁRBOLES GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

- [Recolección de firmas para que la CBD prohíba la liberación de árboles genéticamente modificados](#)

## NUESTRA OPINIÓN

### - Día Internacional contra los monocultivos de árboles

En el año 2004, a la Red Alerta contra el Desierto Verde -que realiza campañas en Brasil contra la expansión de las plantaciones de árboles- se le ocurrió la idea de establecer el 21 de setiembre (Día del Árbol en Brasil) como Día Internacional contra los monocultivos de árboles. La idea fue apoyada por organizaciones en todo el mundo, que desde entonces llevan a cabo una serie de actividades especiales en esta fecha.

Es importante enfatizar que no se trata de un día destinado a la oposición hacia la plantación de árboles en general, sino una actividad enfocada en un tipo de plantación en particular: los grandes monocultivos de árboles.

La necesidad de tal oposición es crecientemente clara. Mientras los gobiernos y muchas organizaciones internacionales siguen promoviendo lo que denominan "bosques plantados" o "plantaciones forestales", las comunidades locales continúan oponiéndose a lo que describen como "desiertos verdes", "cáncer verde", árboles egoístas, "milicos plantados" o "bosques muertos".

Tales diferencias en el uso de las palabras reflejan el abismo entre quienes apoyan tales plantaciones como siendo algo positivo –bosques- y quienes se oponen a las mismas por sus impactos sociales y ambientales negativos, reflejados en los términos arriba mencionados.

El conocimiento adquirido durante las últimas décadas del hecho de que las plantaciones se establecen a expensas de los medios de vida y el ambiente de las poblaciones locales ha alcanzado un nivel tal de certeza que ya no puede seguir siendo ignorado. En país tras país, los monocultivos de árboles han resultado en la pérdida neta de empleos, migración forzada o "voluntaria", apropiación de enormes áreas de tierra por empresas nacionales y transnacionales, desaparición y contaminación de recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, empobrecimiento del suelo, destrucción de ecosistemas locales –bosques o praderas- y en muchos casos en violaciones a los derechos humanos, incluyendo represión, encarcelamiento y hasta muerte.

El crecimiento de la conciencia de los consumidores acerca de los impactos de la producción de productos vinculados a la madera –desde papel hasta muebles- dio lugar a la creación de sistemas de certificación, que garantizarían a los consumidores que sus compras no resultan en impactos sobre los bosques o sobre los pueblos que dependen de los mismos.

Dichos sistemas de certificación fueron promovidos por diversos actores nacionales, regionales e internacionales y dieron lugar a una serie de esquemas tales como: Standard de la Asociación Canadiense (CSA), Consejo de Manejo Forestal (FSC), Programa para el Aval de Esquemas de Certificación Forestal (PEFC), Iniciativa Forestal Sustentable (SFI), Standard Forestal Australiano (AFS), Sistema Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR), Certificación Forestal en Chile (CERTFOR), Consejo Malayo de Certificación de Madera (MTCC).

Sin embargo, ninguno de ellos fue capaz de vislumbrar lo que era evidente para las comunidades locales que habitan en la vecindad de plantaciones: que los monocultivos de árboles a gran escala son intrínsecamente incertificables.

Durante los últimos años, el WRM concentró sus esfuerzos en la crítica a la certificación de

plantaciones por parte del FSC. Esto puede haber generado la impresión errónea de que los otros sistemas eran mejores. Si éste ha sido el caso, nos disculpamos. La sola razón para habernos concentrado en el FSC fue porque la participación en el mismo de ONGs sociales y ambientales le otorgaba a este sistema cierta credibilidad. Los otros sellos –promovidos por gobiernos y empresas– simplemente no tienen credibilidad alguna (ver artículos sobre PEFC, CERFLOR y CERTFOR en la última sección de este boletín).

Sin embargo, que haya mejores o peores sistemas de certificación no es el tema. Lo que se necesita no es certificación sino legislación ... y cumplimiento de la misma. La situación es tan grave que no puede ser dejada en manos de esquemas voluntarios y consultores para decidir si un monocultivo de árboles merece o no recibir un sello: sus impactos son tales que ninguno de ellos merece recibirlo.

Tal legislación debe asegurar, en primer lugar, que los gobiernos cesen de inmediato de subsidiar o apoyar de manera alguna a las empresas plantadoras.

En segundo lugar, que los gobiernos prohíban el establecimiento de nuevas plantaciones en áreas donde existe evidencia acerca de sus impactos sociales y ambientales negativos.

En tercer lugar, que los gobiernos lleven a cabo investigaciones independientes y participativas para evaluar los impactos de las plantaciones existentes y compensen a las poblaciones locales por los perjuicios sufridos, incluyendo la devolución de tierras en casos en que se les hayan sido apropiadas.

En cuarto lugar, que los gobiernos apliquen el principio precautorio e impidan la implementación de plantaciones que puedan resultar en impactos sociales y ambientales.

Lo que antecede son solo algunas de las muchas medidas que los gobiernos deben implementar para comenzar a revertir los problemas causados por sus políticas para la promoción de plantaciones. La gente de cada lugar debería decidir cuales son aplicables y que otras deberían agregarse.

El 21 de setiembre podría ser una celebración para esos organismos vivos que la mayor parte de la gente considera ambientalmente simbólicos –los árboles– pero la manera en que están siendo utilizados para generar ganancias para algunos, hace necesario conmemorar este tercer Día Internacional contra los monocultivos de árboles. Tenemos la esperanza de que en un futuro próximo este Día no será más necesario.

inicio

---

## COMUNIDADES Y BOSQUES

### - **Brasil: campaña internacional contra la violencia rural en la Amazonía**

En el marco de la campaña nacional e internacional “¡Basta de violencia en el campo! ¡Corte este mal por la raíz!” impulsada por la Rel-UITA y la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura (CONTAG) de Brasil, contra la violencia rural en ese país, un equipo integrado por Álvaro Santos, Emiliano Camacho y quien esto escribe viajó desde Montevideo, Uruguay, al estado de Pará, en la Amazonia brasileña. El propósito fue filmar un video documental que recogiera testimonios de algunos de las decenas de casos de dirigentes rurales asesinados o amenazados de muerte.

Estas personas luchan en la "primera línea de fuego", allí donde los "grileros" queman miles y miles de hectáreas de selva para apoderarse de esas tierras sin ninguna documentación –y cuando la tienen siempre es fraudulenta– y explotarla durante los pocos años que durará su fertilidad, irremediablemente condenadas a la desertificación. La asociación entre aventureros enriquecidos, militares retirados y en actividad que han fundado sus propias dinastías feudales desde los años dictatoriales de la década de los 60, los exportadores de maderas nobles que han arrasado con casi el 40% de la mejor madera de la Amazonia brasileña y continúan avanzando, los ganaderos y sojeros sobre enormes extensiones de tierras pirateadas, constituye un factor de poder tan fuerte que, con algunas escasas y honrosas excepciones, arrasa con la Justicia, la Policía y el sistema político local.

El vídeo de 40 minutos producido en esta oportunidad,\* recoge tres de estas historias que sirven para comprender cómo se traduce a nivel personal, individual, en la peripecia de los sobrevivientes, esta masacre social y ambiental que se está ejecutando sobre la Amazonia. Para tener una idea del tamaño del desastre, basta citar algunos datos:

- Considerando sólo el período de la dictadura brasileña (1964-1985), hubo 10 millones de hectáreas de la Amazonia destinadas a colonización. La mayoría distribuida entre los propios altos oficiales militares.

- Desde entonces hasta ahora se produjeron más de 1.550 asesinatos vinculados a la disputa por la tierra entre poderosos hacendados y campesinos sin tierra o dirigentes de trabajadores rurales. Sólo entre 1985 y 2004 hubo 560 homicidios denunciados por esta causa.

- De ellos, la policía investigó apenas el 30 por ciento, sólo el 6 por ciento generó un proceso judicial y nada más que en el 3 por ciento de los casos hubo un pronunciamiento de la justicia, casi siempre absolutorio de los sospechosos por "falta de pruebas". En resumen, los casos en los que se condenó a alguien no llegan al 1 por ciento, y prácticamente en ninguno de ellos "se logró" enjuiciar a los autores intelectuales de los asesinatos.

- Esta ineficiencia de los aparatos policiales y judiciales ha provocado que 300 homicidios ya prescribieron.

- En 2003 se registraron 35 mil familias expulsadas de sus parcelas; en 2004 fueron 37 mil; y en 2005 la cantidad bajó a "sólo" 26 mil familias. No obstante, las cifras parciales en lo que va de este año permite suponer que al fin de 2006 se habrá producido un incremento de familias expulsadas del campo en relación con el año anterior.

- Los brasileños les llaman "grileiros" a los hacendados que lo son por haber "robado" tierras fiscales. Muchas veces decenas de miles de hectáreas. Estos grileiros abren una brecha en la selva por donde puedan entrar y salir grandes camiones. Luego talan toda la madera con alto valor de mercado y el resto lo incendian. Las fotos satelitales muestran todos los días los centenares de incendios ("queimadas", dicen en Brasil) que levantan altas columnas de humo en toda la selva amazónica, desde Bolivia hasta Venezuela.

- Después de quemar la "floresta inútil", los grileiros falsifican títulos de propiedad con la complicidad de autoridades locales corruptas y alambran la nueva "adquisición". Por este procedimiento hay hacendados que llegan a acumular más de 200 mil hectáreas. Primero colocan ganado que "amansa" el suelo selvático, y después plantan soja transgénica usando masivamente el herbicida

glifosato para controlar las malezas.

- En la ciudad de Santarem, en plena selva y sobre el río Amazonas, la corporación transnacional Cargill construyó sin permisos de ningún tipo su propio puerto y los depósitos de soja más grandes del mundo donde acopia la soja producida en estas haciendas ilegales.

- Según cálculos oficiales y conservadores, en todo Brasil han sido "griladas" unas 100 millones de hectáreas, de las cuales el 90 por ciento se ubica en la Amazonia. Esta superficie equivale a los territorios de toda América Central y México sumados.

- Las propuestas de reforma agraria que provienen desde la sociedad civil plantean un uso racional de la floresta: del total de tierra asignada a una comunidad o a una familia de agricultores, sus propietarios sólo pueden cultivar el 20 por ciento, y adquieren el compromiso de conservar el otro 80 por ciento en el cual sólo pueden realizar labores de extracción sustentable. El cumplimiento de este compromiso está vinculado a la propiedad de la tierra.

- En opinión de los sindicatos y asociaciones de campesinos locales el actual gobierno ha hecho esfuerzos notorios para provocar cambios en esta situación. Por ejemplo: en los últimos años se liberaron en la zona 17.325 personas que estaban sometidas a trabajo esclavo en haciendas alejadas de centros poblados. En 2005 se multiplicaron por cuatro los recursos federales destinados a resolver y prevenir estos conflictos. Se aprobaron leyes de protección de importantes áreas de la Amazonia (que habrá que hacer cumplir) sin que esto colme las aspiraciones y necesidades de las comunidades concernidas. Se aprobó la ley de protección de las comunidades quilombolas. Se comenzó a implementar un programa de georeferenciamiento de la "frontera caliente" de la floresta amazónica correspondiente a las áreas más atacadas por los grileiros y madereros, a cargo del ejército brasileño, entre otras iniciativas y acciones.

- A pesar de esto, el ritmo de deforestación en la Amazonia brasileña permanece en aproximadamente 2 millones de hectáreas anuales, y los cambios ya decididos en la capital muchas veces demoran años en llegar hasta los lugares concretos donde las comunidades y los trabajadores rurales sufren las consecuencias de la impunidad y el absolutismo de los hacendados, de los poderosos.

La campaña nacional e internacional de la Rel-UITA y la CONTAG ya está dando resultados positivos como la visita de delegaciones sindicales y parlamentarias europeas al gobierno brasileño y a la zona de Pará con el propósito de conocer in situ la situación denunciada. La presencia de la Policía Federal en la zona, y el reforzamiento de los recursos económicos y humanos del Ministerio Público en la región han abierto una esperanza de cambio. La experiencia acumulada en tantos años de lucha, sin embargo, provoca que ninguna organización social baje la guardia y todas se mantienen activas y alerta.

Por Carlos Amorín, Rel-UITA

\*"En la frontera del miedo. Historias de vida y muerte", Dirección y guión: Carlos Amorín y Alvaro Santos; Cámaras: Emiliano Camacho, Alvaro Santos, César Ramos; Edición: Fabián Arocena; Realización: Osmedia ([www.osmedia.com.uy](http://www.osmedia.com.uy)); Producción: Rel-UITA ([www.rel-uita.org](http://www.rel-uita.org)), CONTAG ([www.contag.org.br](http://www.contag.org.br)). Por información sobre el vídeo: [uita@rel-uita.org](mailto:uita@rel-uita.org)

La versión completa de este artículo se encuentra disponible en <http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/Para.html>.

---

### - Cuenca del Congo: financiación internacional para apoyar madereo oligárquico

Las concesiones madereras en el continente africano se perciben a menudo como unidades de manejo forestal. Sin embargo, es más apropiado verlas como una especie de moneda de cambio en un sistema más amplio de poder político y explotación.

La comunidad internacional ha cumplido un papel importante en el establecimiento y la perpetuación de las políticas del "patrimonio maderero". La forma más importante en que los países del Norte promueven el madereo oligárquico es probablemente el apoyo político, militar, económico y diplomático a los regímenes oligárquicos que está destinado a servir. A menudo este apoyo es extraoficial, privado u oculto. Las instituciones financieras internacionales brindan ayuda adicional al otorgar préstamos sin exigir reformas forestales y préstamos para proyectos o reformas forestales ineficaces o mal dirigidos y al aportar al sector privado inversiones relacionadas con operaciones forestales.

A pesar de los problemas ya conocidos del sector de bosques de Camerún, la financiación internacional sigue lloviendo en el país: durante la década de los 90 se entregaron por lo menos US\$ 75 millones de ayuda exterior a proyectos forestales y de conservación.

A mediados de los años 1990, la Administración británica para el comercio exterior (Britain's Overseas Development Administration) intentó (más tarde lo hizo el DFID - Departamento para el Desarrollo Internacional) instrumentar un programa para "hacer operativas" las disposiciones de la Ley Forestal de 1994 de Camerún relativas al establecimiento de bosques comunitarios. Para esto se requería establecer, en primer lugar, un conjunto claro de normas para la adjudicación de los bosques comunitarios, cosa que el gobierno de Camerún nunca hizo, y en segundo lugar una unidad dentro del Departamento Forestal para administrar dichos bosques. Tal como los define la Ley Forestal de Camerún, los bosques comunitarios son muy limitados tanto en tamaño (5.000 hectáreas como máximo) como en duración (15 años, renovable por otros 15). Además, solamente pueden establecerse en las zonas limitadas de bosque "no permanente", excluyéndoselos así de las zonas designadas como unidades de manejo forestal (UFA). Sin embargo, después de la aprobación de la Ley Forestal de 1994, estas zonas de bosque no permanente fueron volviéndose cada vez más importantes para la maquinaria política como medio para adjudicar derechos de madereo a corto plazo, del tipo "corte y váyase" o "venta de cortes". De este modo la administración de bosques trabajó activamente en contra de la instrumentación de los bosques comunitarios.

Con esto se ilustra el hecho de que las instituciones que hoy administran el "sector forestal" en algunas partes de África no solamente se articulan principalmente en torno al madereo sino que también, dado que este madereo se vincula con los intereses creados de altos personajes políticos, se oponen directamente a todo uso de los recursos forestales (como los bosques comunitarios) que, aunque beneficiosos en términos de desarrollo, pusiera potencialmente en peligro el arbitrio absoluto que estas figuras políticas han ejercido en la utilización de los bosques como forma de patrocinio político.

Dada la importancia de las concesiones madereras para 'aceitar el engranaje' del patrocinio político,

el soborno y la corrupción en todos los países de la cuenca del Congo (y en otros lugares: Costa de Marfil, Togo, Guinea, etc.), no sorprende que los proyectos con financiación internacional destinados a brindar "asistencia técnica" para mejorar el "desempeño" de las concesiones forestales de África hayan demostrado ser fracasos tan espectaculares.

Extraído de: "The political ecology of the African logging concession system and the complicity of international donors", Simon Counsell y Arnaud Labrousse, enviado por Simon Counsell, Rainforest Foundation, correo-e: [simonc@rainforestuk.com](mailto:simonc@rainforestuk.com)

[inicio](#)

---

### - Laos: la madera certificada por el FSC es ilegal

La certificación de una operación forestal en virtud del sistema del Consejo de Manejo Forestal (FSC) debería significar que todos podemos estar tranquilos al saber que los bosques están siendo manejados razonablemente bien. Lamentablemente, parece que no es el caso. SmartWood, una certificadora acreditada por el FSC, certificó recientemente en Laos operaciones que de acuerdo con la Ley Forestal de ese país producen madera en forma ilegal.

La certificación del FSC es el resultado de más de una década de proyectos de asistencia y millones de dólares de ayuda financiera. Entre 1996 y 2000, un proyecto financiado por el Banco Mundial y el gobierno de Finlandia estableció una serie de Asociaciones Forestales de Aldea en las provincias laosianas de Savannahkhet y Khammouane. Este proyecto era parte del Programa de manejo forestal y conservación (FOMACOP) y su objetivo era desarrollar un modelo de "silvicultura de aldea" mediante el cual los aldeanos extraerían árboles de los bosques y recibirían una parte del dinero obtenido por la madera.

En 1999 se hicieron los primeros intentos de determinar si la "silvicultura de aldea" podía ser certificada por el FSC. Pero los funcionarios del gobierno de Laos no estaban conformes con ningún tipo de supervisión externa de las operaciones forestales. Corrió el rumor de que los funcionarios temían perder una lucrativa fuente de ingresos: los sobornos de la industria maderera. FOMACOP se derrumbó en el año 2000, poco después del fallido intento de certificación.

Luego el Banco Mundial y el gobierno finlandés iniciaron otro proyecto, esa vez llamado Proyecto forestal sustentable y desarrollo rural (SUFORD). En mayo de 2003, SmartWood evaluó el manejo forestal. En enero de 2006, luego de que una serie de condiciones se cumpliera a su satisfacción, SmartWood otorgó un certificado FSC a 39.000 hectáreas de bosque manejado por seis aldeas en la provincia de Savannahkhet. Un mes antes SmartWood había certificado cerca de 10.000 hectáreas de silvicultura de aldea en la provincia de Khammouane.

El WWF apoyó la certificación junto con Tropical Forest Trust, organización fundada en 1999 para expandir la superficie de bosques certificados por el FSC en zonas tropicales. "La certificación FSC de estos bosques es un paso gigante hacia el manejo forestal sustentable y la conservación en la región", afirmó Roland Eve, el director del WWF para Laos.

Pero el informe de la auditoría del proyecto SUFORD financiado por el Banco Mundial y Finlandia cuenta una versión diferente. El informe documenta los datos recogidos en una visita realizada por un equipo compuesto por el Departamento Forestal de Laos y un consultor del proyecto SUFORD,



Tomas Jonsson. El equipo visitó el distrito Thapanthong de la provincia de Savannahkhet entre marzo y mayo de 2006.

El equipo descubrió que las operaciones certificadas de maderero no se llevan a cabo de acuerdo con los planes de manejo. Según el informe de Jonson, "Los documentos estaban por todos lados y faltaban partes" y "eran entendidos sólo parcialmente" por los funcionarios forestales locales, madereros y pobladores.

El equipo comprobó que los pobladores y el personal forestal local eran "prácticamente incapaces de utilizar los mapas de árboles". Se descubrió que los mapas eran inexactos. En el bosque, los árboles que había que cortar no estaban marcados en forma adecuada. Se habían talado árboles sin marcar. Algunos árboles marcados estaban en pie. Se habían cortado árboles de resina utilizados por los aldeanos. En la zona de corte habían quedado algunos troncos grandes de buena calidad. Nada sorprendente si se tiene en cuenta que los madereros no tenían los mapas. Tampoco tenían indumentaria de seguridad ni equipos protectores. Los trabajadores vivían bajo una lona encerada, en un campamento maderero sin baños ni instalaciones para el aseo.

Se cortaron más árboles que lo indicado en los planes de manejo porque la provincia emitió cuotas de maderero "por encima de los volúmenes cosechables según los planes de maderero aprobados". Se habían talado muchas áreas que de acuerdo con los planes de manejo todavía no tendrían que haberse cosechado. El equipo también encontró signos de que los pobladores estaban cortando y procesando madera aserrada dentro de la zona certificada.

El equipo concluyó que el maderero no está siendo controlado por los planes de manejo sino dirigido por la demanda de una cantidad siempre en aumento de aserraderos locales. La interpretación de los planes para el maderero es que éstos "dan derecho a cortar determinado volumen en lugar de permitir específicamente la remoción de los árboles seleccionados y marcados", según el informe de Jonsson.

Con la certificación del FSC debería ser posible saber de qué lugar específico del bosque procede la madera, mediante un sistema de marcado y seguimiento de la misma. El equipo comprobó que "ningún árbol ni tronco estaba marcado según las exigencias", y esto ocurrió "en todos los lugares inspeccionados (bosque, playa de troncos, aserradero)". Los troncos marcados no llevaban el número apropiado y a menudo la marca se hacía con tiza. "El seguimiento y la cadena de custodia de árboles y troncos son por lo tanto imposibles", escribió Jonsson en su informe.

El equipo supervisor también encontró pruebas de maderero ilegal: maderero en zonas para las que los planes de manejo aún no habían sido aprobados o no existían. Si los troncos no se marcan en forma apropiada, no hay forma de saber si la madera de esa operación ilegal u otras por el estilo no se está haciendo pasar como madera certificada por el FSC.

Pero SmartWood sabe todo esto. Los asesores de SmartWood pusieron una condición que reza: "Al final del Año 1, todos los troncos deben contener marcas claras y duraderas (por ejemplo, pintura o cortes) para identificar la aldea, la faja y el número de tronco".

En virtud de la Ley Forestal de Laos es ilegal mover troncos que no hayan sido marcados en la forma apropiada. Por lo tanto, mientras no se cumpla la condición impuesta por SmartWood, para la ley de Laos la madera de Savannahkhet certificada por el FSC es ilegal.

Por Chris Lang, correo-e: [chrislang@t-online.de](mailto:chrislang@t-online.de), [www.chrislang.blogspot.com](http://www.chrislang.blogspot.com)



## **- Nicaragua: minería en la Reserva de Biosfera del Sureste**

Nicaragua conoce desde hace largo tiempo los efectos de la minería. Las numerosas explotaciones de oro y otros minerales metálicos han dejado una secuela de deterioro ambiental, impactos sobre el recurso hídrico con niveles elevados de cianuro, plomo y arsénico, entre otros, y daños irreparables en la salud de miles de trabajadoras y trabajadores, quienes además han visto violentados sus derechos laborales.

A pesar de que algunos municipios de Nicaragua que apostaron al desarrollo sobre la base de actividades extractivas son los que registran mayores niveles de pobreza --de acuerdo con el mapa de pobreza elaborado por el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC)-- el Gobierno de Nicaragua muestra un creciente interés por continuar otorgando concesiones mineras en todo el país. El Centro Humboldt ha registrado que al mes de diciembre del año 2005 se ha otorgado un total de 1.401.539 hectáreas en concesiones mineras de exploración y explotación metálica y no metálica, en un país cuyo territorio tiene una superficie terrestre total de 12.142.800 hectáreas.

Recientemente, el Gobierno Municipal de Nueva Guinea, otorgó a la Empresa Minerales de Nicaragua S.A. (MINESA) un permiso para exploración y explotación minera a cielo abierto. Miembros del Comité de Desarrollo Municipal (CDM), de la Comisión Ambiental Municipal (CAM) y de la Sociedad Civil Organizada (SCO) denunciaron el hecho ante la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En marzo de 2004, MINESA había solicitado a la Dirección General de Recursos Naturales del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), una concesión minera por un período de 25 años, en un lote denominado San Antonio, con un total de unas 23.000 hectáreas.

El lugar se encuentra en el Municipio de Nueva Guinea, que forma parte de la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua, la cual posee una extensión de 18.340 Km<sup>2</sup> y alberga gran biodiversidad de flora y fauna. "El suelo de Nueva Guinea es arcilloso y ácido. Por ser un trópico húmedo, la descomposición de las hojas, elementos orgánicos y la humedad le favorece con una capa fértil, lo cual lo hace productivo. Sin embargo, el desarrollo de la minería perjudicaría nuestro ambiente, al convertir el suelo en trópico seco" explicó Luis Umaña, representante de la SCO. La explotación minera cambiaría por completo el tipo de vegetación, la biodiversidad, flora y fauna, además de afectar la productividad de los suelos y provocar el desplazamiento de la población y otras actividades económicas que son generadoras de mayores ingresos.

Umaña explicó que con este tipo de acciones el Gobierno Municipal de Nueva Guinea inducirá la degradación socio-ambiental de la zona, que afectará a más de 120.000 habitantes. Como es una región de lluvias constantes, existe gran peligro de que la tierra absorba el cianuro que se esparza, con lo cual se contaminarán las aguas subterráneas.

La SCO denunció que no se había cumplido con lo que disponen las leyes acerca de realizar una consulta previa a la población para una concesión minera. "Se ha violentado la Ley 475 de Participación Ciudadana, la cual faculta a todo gobierno a hacer consultas a los ciudadanos. Por lo tanto, solicitamos información más amplia, a fin de emitir opinión en relación a la viabilidad, beneficio o perjuicio que esta actividad pueda traer al municipio de Nueva Guinea" expresó Umaña.

El miembro de la SCO instó al alcalde de municipio y a su gobierno a que respeten los artículos 60 y 102 de la Constitución Política de Nicaragua, los cuales garantizan el derecho de los ciudadanos a habitar en un ambiente sano, así como la obligación del Estado de preservar y cuidar el ambiente y los recursos naturales.

Artículo basado en información obtenida de: "Reserva de la biosfera del Sur Este de Nicaragua en Peligro por concesión Minera", Aldo Palacios, distribuido por la Red de Periodistas Ambientales; Caso: Expansión de Concesiones y Actividades Mineras en Territorios Centroamericanos, Centro Humboldt,  
[http://www.humboldt.org.ni/descargas/denuncias\\_veredictos/veredicto%20Caso%20Centroamerica%20mineria.pdf](http://www.humboldt.org.ni/descargas/denuncias_veredictos/veredicto%20Caso%20Centroamerica%20mineria.pdf)

[inicio](#)

---

## COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES

### - Brasil y Uruguay: las promesas de Stora Enso y la dura realidad

Desde hace algunos meses tanto en Uruguay como en el Sur de Brasil circulan insistentemente declaraciones, de funcionarios de la empresa sueco finlandesa Stora Enso, así como también de jefes de los gobiernos de ambos países, sobre las ventajas que tendrá para la población local la instalación de fábricas de celulosa de dicha empresa en la región.

El presidente para América Latina de Stora Enso, Nils Grafström, como otros altos ejecutivos de la firma sueco-finlandesa, recorren diferentes poblados de ambos países con el solo cometido de anunciar riqueza y desarrollo preservando el medio ambiente. Algo muy similar ocurre también en este momento en otros países latinoamericanos, africanos y asiáticos como China, donde representantes empresariales suecos y finlandeses no cesan de afirmar las bondades sociales, económicas y ambientales de sus proyectos de instalación de miles de hectáreas de plantaciones y de nuevas fábricas de celulosa.

Sin embargo los hechos demuestran que una vez instaladas en los países del sur la realidad es muy diferente a lo que estas empresas prometieron.

La experiencia de la fábrica de celulosa Veracel –propiedad conjunta de Stora Enso y Aracruz y operada por la primera- en el estado brasileño de Bahia es un claro ejemplo de insustentabilidad. Tal como lo afirma una carta que recibimos firmada por un conjunto importante de "hombres, mujeres y jóvenes, trabajadores rurales y urbanos, indígenas, ambientalistas, científicos, profesores y estudiantes" de esa región brasileña, en la que denuncian "la situación de degradación y miseria en que se encuentra la región del Extremo Sur de Bahia, promovida por la empresa de celulosa, Veracel, una joint venture de Stora Enso".

Dicha situación es el resultado de los impactos sociales y ambientales derivados tanto de los grandes monocultivos de árboles que la empresa ha estado estableciendo desde hace años en esa región para disponer de la necesaria materia prima, como de la propia fábrica de celulosa que empezó a funcionar en el año 2005 con una producción anual de 900.000 toneladas de celulosa para exportación.

En esa carta se dice que “a lo largo de los años, Veracel originó antecedentes de degradación al medio ambiente, concentración de tierra, expulsión de miles de trabajadores del campo para las periferias de las ciudades, causando grandes trastornos sociales y ambientales”.

Con respecto al tema de la generación de empleo, la carta afirma que “no satisfecha con la cantidad de tierras adquiridas en el extremo sur de Bahía para la plantación de eucaliptos, Veracel Celulose avanza ahora para el sur del estado” y que “solamente en el municipio de Mascote, la empresa adquirió diversas propiedades. Aproximadamente 400 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo. Gran parte de estos trabajadores se trasladaron para las periferias de las ciudades vecinas”.

Al igual que lo que está aconteciendo en Uruguay y en muchos otros países, los firmantes de la carta denuncian que “En una de las propiedades del Conjunto Santa Rita (formada por 4 haciendas) adquiridas por Veracel... las casas, corrales y plantaciones ya fueron destruidos para borrar los vestigios de que un día hubo allí seres humanos que sobrevivían de la tierra”.

También como ya está ocurriendo en otras regiones, las plantaciones impactan sobre el agua, y en ese sentido la carta dice que: “En toda la región, la plantación extensiva de eucalipto promovió la desaparición de diversos ríos y cañadas”.

Cuando Stora Enso se instaló en Bahía, lo hizo en base a las mismas promesas de empleo, desarrollo y riqueza que ahora está haciendo en otros países. Según la prensa uruguaya por ejemplo “la información manejada hasta ahora por Stora Enso” es que durante su fase operativa generará “unos 3.000 puestos directos e indirectos”. En Bahía dichas promesas no solo no se cumplieron, sino que la empresa generó expulsión rural, desempleo y miseria.

Nos preguntamos hasta cuándo estas empresas podrán seguir repitiendo sus mentiras impunemente.

La carta a la que hacemos referencia en este artículo se encuentra disponible en:

<http://www.wrm.org.uy/paises/Brasil/CartaStoraEnso.html>

[inicio](#)

---

### **- Camboya: los impactos de las plantaciones de pino en la provincia de Mondolkiri**

Desde la transición de Camboya hacia una economía de mercado, ocurrida a principios de los años 1990, en ese país se ha acelerado el establecimiento de monocultivos de árboles de crecimiento rápido para producir la llamada madera rápida. En el marco del paradigma de desarrollo de “concesiones económicas” se propusieron y establecieron plantaciones de maderas rápidas como acacia, pino y eucalipto. La mayoría de estas concesiones económicas violan la ley camboyana y no hay muchos indicios de que hayan creado los beneficios e ingresos para el Estado propuestos.

Entre setiembre de 2004 y marzo de 2005 el grupo de activistas ambientalistas voluntarios Environment Forum Core Team (EFCT) hizo una investigación de campo en cuatro concesiones económicas de Camboya. El grupo EFCT es parte de una red de ONG orientadas al medio ambiente

establecida por el Foro de ONG sobre Camboya en 1995. Mediante la utilización de métodos cualitativos y cuantitativos, EFCT observó los probables beneficios y desventajas de las concesiones económicas sobre el sustento de las personas (véase el informe completo en inglés en: <http://www.ngoforum.org/kh/Land/Docs/Plantation/EFCT%20Plantations%20Report%20FINAL.pdf>).

Entre los casos investigados figura el de la plantación de árboles de crecimiento rápido de Wuzhishan LS Group en la provincia de Mondolkiri. Tras haberse establecido como empresa en mayo de 2004, Wuzhishan recibió en agosto de ese año permiso para establecer una plantación de pino de 199.999 hectáreas en los distritos Sen Monorom y Ou Reang, provincia de Mondolkiri. El límite de la concesión también se superpone en parte con la zona de conservación de la biodiversidad de Seima.

Para la planificación de la concesión no hubo consultas con las comunidades locales y la comunicación con las autoridades locales fue extremadamente limitada. No existe un mapa oficial disponible para el público que indique la extensión de la concesión otorgada. En setiembre de 2004, Wuzhishan inició sus operaciones en serio, aplicando el herbicida glifosato en praderas de la concesión, quemando la vegetación muerta y procediendo a plantar 250.000 pinos. Al preparar la tierra para la concesión, Wuzhishan "limpió" indiscriminadamente no sólo las praderas que la población local Phnong usa para pastar su ganado sino también bosques espirituales y cementerios ancestrales, elementos esenciales de la cultura Phnong. El uso de herbicida fue muy criticado por las comunidades: se cree que contaminó el agua y afectó la salud humana y que es responsable de la muerte de ganado.

El 16 de junio de 2005 hubo grandes manifestaciones. Entre 650 y 800 personas afectadas por la plantación, en su mayoría Phnong, protestaron frente a la oficina de la empresa en la ciudad de Sen Monorom. Esto llevó al Consejo de Ministros a emitir una notificación el 17 de junio de 2005 ordenando a Wuzhishan suspender inmediatamente la plantación en todas las zonas de la concesión. Se estableció un comité interministerial para resolver el problema.

No obstante, ante la aparente falta de avances y el hecho de que la empresa seguía plantando, a fines de junio las comunidades protestaron con cortes de ruta en las comunas afectadas por la concesión. Según se informó, luego de esto las comunidades fueron objeto de numerosas amenazas y tácticas de intimidación. Los cortes de ruta duraron alrededor de una semana hasta que la empresa los rompió con camiones llenos de trabajadores que blandían azadas, palos y cuchillos.

Los resultados de la investigación demuestran que la principal ocupación de casi todos los hogares entrevistados (98%) era la agricultura y cría de animales. El 65% manifestó que las operaciones de la empresa habían afectado estas actividades agrícolas, debido principalmente a la pérdida de tierras y los efectos de la fumigación con glifosato. Según se informa, muchas mujeres de las aldeas ya no salen al campo por temor a ser violadas por los trabajadores de la empresa.

Los entrevistados afirmaron que la madera disponible había disminuido significativamente y culparon de este hecho principalmente a Wuzhishan, que taló el bosque. Se observó también que la vida silvestre era menos abundante y se informó de la pérdida de hábitat resultado de las actividades de Wuzhishan.

En el momento de escribir el informe se desconocía a cuánto ascendían exactamente las pérdidas de los pobladores, pues el límite preciso de la plantación en las cercanías de las aldeas seguía negociándose. A pesar de ello, el 57% de los entrevistados afirmó que perdería parte de sus tierras. Las grandes superficies de praderas alejadas del centro de los poblados, que los habitantes usan

para pastar su ganado, se están perdiendo. Se están talando bosques y árboles frutales (que crecen tanto en los bosques como en las praderas abiertas) vitales para la recolección de productos forestales no madereros y se están obstruyendo las sendas utilizadas por los Phnong. Además, los trabajadores de la empresa roban animales, fruta y cultivos. También se han destruido importantes sitios culturales, a saber bosques espirituales y cementerios. El reconocimiento legal de la propiedad de la tierra se ve complicado por los sistemas de propiedad comunal practicados por los indígenas Phnong.

En el 21% del total de los hogares entrevistados había personas que trabajaban en la plantación. Cada obrero trabajaba ocho horas por día y recibía una paga de entre US\$ 30 y US\$ 42,50 mensuales; muchos trabajadores recibían también 25 kg de arroz por mes. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya (UNCOHCHR) describió las condiciones de trabajo en la plantación como duras. Los pobladores entrevistados manifestaron que: cuando estaban enfermos no podían pedir el día; tenían que trabajar mucho; el salario no era suficiente; estaban preocupados porque supuestamente había violadores entre los trabajadores; se los presionaba para que trabajaran mucho; los trabajadores robaban ovejas, perros y vacas para comer. Informes más recientes (agosto de 2005) indican que en su mayor parte los empleados de la plantación son trabajadores itinerantes y no indígenas Phnong locales.

La concesión de Wuzhishan ha tenido graves impactos negativos sobre el sustento de los habitantes locales, en su mayoría indígenas Phnong, lo que provocó varias protestas y requirió la intervención del gobierno central para negociar una solución. No hubo consultas con la población local durante las etapas iniciales del desarrollo de la concesión, lo que llevó a que se perdiera confianza en la empresa y al sentimiento general de que las inquietudes de la gente no se están tratando adecuadamente. Tampoco se consultó a autoridades y departamentos de gobierno locales, y se los dejó al margen del proceso de adopción de decisiones. Cuando se les preguntó qué les parecía la empresa, en 11% de los hogares entrevistados la respuesta fue que les gustaba porque les daba trabajo, pero el 88% dijo que no le gustaba.

Después de la publicación del informe las comunidades afectadas han intentado continuar el diálogo con el gobierno. En octubre de 2005 funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente llevaron a cabo una evaluación del impacto ambiental y social en menos de dos días. La evaluación, a la que hasta ahora no se ha dado publicidad, no encontró impactos ambientales y atribuyó los impactos sociales a las exigencias irrazonables de los pobladores. Desde entonces, la opinión de que las comunidades locales son demasiado exigentes e incultas para comprender el "desarrollo" ha sido repetida en varias reuniones entre representantes de las comunidades y funcionarios del gobierno. Recientemente se organizaron "viajes de estudio" a la capital y otras provincias "más desarrolladas" para que los concejales comunitarios de la zona afectada, en la provincia de Mondolkiri, aprendieran del ejemplo. No se informó a las organizaciones de la sociedad civil, a las que se impidió sistemáticamente apoyar a las comunidades. Los pobladores indígenas Phnong temen que el gobierno demarque sus tierras comunitarias sin ningún respeto por sus derechos tradicionales, derechos claramente reconocidos por la ley de Camboya. Hasta el momento la situación sigue sin resolverse.

Extraído y adaptado de: "Fast-wood Plantations, Economic Concessions and Local Livelihoods in Cambodia", Environment Forum Core Team (EFCT), <http://www.ngoforum.org.kh/Land/Docs/Plantation/EFCT%20Plantations%20Report%20FINAL.pdf>. Información actualizada por el Foro de ONG sobre Camboya.

---

## - India: la nueva Política Nacional Forestal ¿abrirá la puerta a los árboles GM?

El estudio de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO) "Examen provisional de la biotecnología en la silvicultura, incluida la modificación genética" (<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae574e/ae574e00.pdf>), publicado en diciembre de 2004, es un resumen del estado de la biotecnología aplicada a la silvicultura en general con una mirada específica a la modificación genética de los árboles. Allí se informa de 225 ensayos de campo al aire libre de árboles GM en todo el mundo, distribuidos en 16 países. Desgraciadamente no se hace diferencia entre ensayos de campo actuales y pasados, con lo que se brinda una imagen un poco sesgada. Según el estudio, 150 de los 225 ensayos están en Estados Unidos. Los restantes aparecen más que nada en Europa: Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, Portugal, Finlandia y Suecia, así como en Australia y Canadá. En cuanto al Sur, se informa de ensayos de campo en India, Sudáfrica, Indonesia, Chile y Brasil. Hasta donde se sabe, China es el único país que ha establecido plantaciones comerciales de árboles GM, con bastante más de un millón de árboles plantados en diez provincias.

El estudio indica que India llevó a cabo un ensayo de campo de árboles GM. En la actualidad se está debatiendo una nueva Política Nacional Forestal a puertas cerradas; según un informe del Indian Financial Express, de ésta "se espera que dé un espaldarazo a los árboles genéticamente modificados (GM) para potenciar la industria del papel y mejorar la calidad de los productos de la madera".

Los árboles modificados genéticamente tienen el potencial de cambiar los bosques del mundo en forma permanente y radical. Al igual que con los cultivos GM, la fuga de genes es uno de los principales problemas, pero los efectos tienen mayor alcance debido al papel fundamental de los árboles en el ecosistema.

Los periodistas de Ecologist Asia hicieron algunas averiguaciones pero no pudieron descubrir detalles de la Política Nacional Forestal propuesta. La subsidiaria de Monsanto en India afirma no estar trabajando actualmente con árboles GM en el país. En respuesta a una consulta vía correo electrónico, Susan Joseph, representante en India de la empresa, dijo desde su oficina en Mumbai que "El negocio de Monsanto en India consiste en desarrollar herbicidas de alta calidad, semillas híbridas (maíz y girasol) y semillas con rasgos biotecnológicos (algodón Bt)". Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la probable actitud de Monsanto en caso de que la nueva Política Nacional Forestal promoviera los árboles GM, no contestó.

En respuesta a esta declaración Anne Peterman, de la organización estadounidense Global Justice Ecology Project, que coordina una campaña internacional contra los árboles GM, dijo que "Se están modificando árboles para que resistan al herbicida Roundup de Monsanto. Si se proponen árboles Roundup Ready para India hay una conexión con Monsanto, incluso aunque Monsanto no haya participado directamente de la investigación y el desarrollo. Sin lugar a dudas se beneficiarán con estos árboles gracias al aumento de las ventas de su tóxico herbicida Roundup". Si, como sugiere el Indian Financial Express, el despliegue de árboles GM en India se hace con el propósito de potenciar la industria del papel, es probable que uno de los rasgos modificados genéticamente sea la cantidad de lignina de los árboles. Reducir la lignina, que otorga rigidez y fuerza a las paredes de las células vegetales, implica un ahorro en potencia para la industria de la pulpa y el papel, que así tendría



menos lignina que eliminar durante el procesamiento de la fibra de madera.

Sin embargo, como señala el profesor Joe Cummins, de la organización británica Institute of Science in Society (ISIS) en un artículo científico sobre la reducción de lignina, "las ventajas de la reducción de lignina no compensan las desventajas de los vegetales con lignina reducida, que son atacados con mayor facilidad por predadores como insectos, hongos y bacterias".

Es probable que los débiles árboles GM de lignina reducida necesiten otros rasgos de ingeniería genética tales como resistencia Bt a los insectos y tolerancia a herbicidas. Por lo tanto, solamente será cuestión de tiempo hasta que los rasgos escapen al ecosistema silvestre, como ha ocurrido con cultivos GM de diversos tipos.

Los organismos internacionales como la FAO también tienen un papel fundamental en el tema de los árboles GM. En respuesta a una pregunta planteada por correo electrónico, Pierre Sigaud, de esta organización, dijo que "la FAO no se declara a favor ni en contra de los árboles GM". En una declaración sobre biotecnología publicada en su sitio web, la FAO afirma que apoya "un procedimiento prudente caso por caso para afrontar las preocupaciones legítimas por la bioseguridad de cada producto o proceso antes de su homologación". Sin embargo, la participación de la FAO en el programa de árboles GM de China parece representar una posición de hecho a favor de las plantaciones industriales de árboles GM. Se solicitó a la FAO una aclaración de su posición al respecto mediante un correo electrónico que no obtuvo respuesta.

Entre las especies GM que podrían llegar a comercializarse en India figura el eucalipto, que ha sido llamado "árbol egoísta" debido a la gran cantidad de agua que consume, con el correspondiente efecto sobre el vulnerable nivel freático del país. La fumigación con glifosato, por ejemplo el Roundup de Monsanto, también conllevaría la inevitable contaminación del agua potable y problemas de salud como cáncer y abortos para las personas del lugar; Dinamarca ya ha prohibido el glifosato por este motivo.

La nueva Política Nacional Forestal india se está gestando con estos antecedentes, posiblemente bajo presión de empresas que obtendrían ganancias con los árboles GM. Al tiempo que los ya mermados bosques de India luchan por abrirse paso en el siglo XXI junto con las comunidades humanas, los ecosistemas nativos y, especialmente, las reservas de agua que de ellos dependen; es hora de exigir transparencia en este proceso.

Artículo basado en información de: "The International Status of Genetically Modified Trees", 2005, Anne Petermann, Global Justice Ecology Project, <http://www.globaljusticeecology.org/index.php?name=getrees&ID=339>; "Preliminary Review of Biotechnology in Forestry Including Genetic Modification", FAO, diciembre de 2004, <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae574e/ae574e00.pdf>; "GM trees bloom in rush to feed growing paper industry", BV Mahlakshmi, 2005, [http://www.financialexpress.com/fe\\_full\\_story.php?content\\_id=97000](http://www.financialexpress.com/fe_full_story.php?content_id=97000) ; "Frankentrees Threaten India's Forests", Philip Carter, correo-e: [pcarter@web.ca](mailto:pcarter@web.ca), [http://www.writingfortheplanet.com/images/GE\\_Trees.pdf#search=%22Frankentrees%20Threaten%20India%E2%80%99s%20Forests%22](http://www.writingfortheplanet.com/images/GE_Trees.pdf#search=%22Frankentrees%20Threaten%20India%E2%80%99s%20Forests%22);

[inicio](#)

---



## - Indonesia: expertos del Banco Mundial y el WWF buscan nuevas formas de subsidiar plantaciones

Cuando se establecen plantaciones industriales en cualquier lugar del Sur, los gobiernos ofrecen a los inversores una gama de subsidios. En Indonesia el gobierno ha entregado miles de millones de dólares para el desarrollo de las plantaciones. Los sectores de las plantaciones y la celulosa también han recibido un generoso apoyo en materia de asistencia financiera. El Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo financiaron estudios en los años 1980. Diversas agencias de créditos para la exportación colaboraron en la financiación de la construcción de plantas de celulosa.

Durante la década de 1980, mientras las empresas madereras destruían vastas superficies de los bosques de Indonesia, el gobierno de este país estableció un "Fondo para la reforestación" financiado con las regalías que pagaban las empresas madereras. Una vez que las empresas cumplían sus obligaciones de reforestación podían reclamarle el dinero al Fondo. Por supuesto que la mayoría de las empresas no hizo ninguna reforestación y simplemente renunciaron al cobro de los pagos que hubieran correspondido si hubieran reforestado. El resultado fue que la cantidad de dinero del Fondo creció rápidamente.

En los 1990 el gobierno modificó el Fondo para la reforestación de modo de permitir la financiación directa de plantaciones industriales de árboles. Pero la mayor parte del dinero fue a parar a la familia de Suharto y sus compinches comerciales. La organización no gubernamental Down To Earth observa que Suharto utilizó dinero del Fondo para la empresa estatal de aviación y los Juegos del Sudeste Asiático. Entre 1993 y 1998 se perdieron más de 5 mil millones de dólares del Fondo. Muchos préstamos del Fondo que efectivamente se canalizaron a empresas de plantaciones industriales de árboles se convirtieron en deudas incobrables. Hace dos años, el Departamento Forestal reestructuró los préstamos del Fondo para la reforestación. Como resultado, 14 empresas de plantaciones cerraron porque no podían pagar la deuda.

Las empresas elevaron propuestas solicitando financiación para establecer plantaciones industriales de árboles, pero las superficies plantadas eran mucho menores que lo declarado. Entre 1990 y 1997 se distribuyeron casi mil millones de dólares del Fondo, con lo que deberían haberse pagado cinco millones de hectáreas de plantaciones; en realidad, se plantó menos de un quinto de esta superficie.

Este mismo año la Alianza Forestal de WWF/Banco Mundial inició un proyecto con el Ministerio de Bosques con el objetivo de desarrollar "mecanismos financieros que puedan ayudar a expandir y acelerar el desarrollo de las plantaciones". En una "nota conceptual sobre la actividad" de febrero de 2006, la Alianza declara que la superficie de plantaciones de Indonesia precisa "por lo menos duplicarse" para garantizar el futuro de la industria procesadora de madera del país (que está dominada por la industria de la pulpa y el papel). La capacidad total de las plantas de celulosa indonesias asciende a casi seis millones de toneladas por año. Según el Centro Internacional de Investigaciones Forestales (CIFOR), cerca del 70% de la madera consumida en estas fábricas es madera dura tropical mixta procedente de lo que queda de los bosques de Indonesia.

En los casos en que se establecieron plantaciones, esto se hizo a un alto costo ambiental y social. Por ejemplo, en la provincia de Riau el 75% de las tierras de Asia Pulp and Paper se ubican en humedales de turba. La única forma de establecer una plantación es talando el bosque y drenando el suelo.

Una respuesta obvia sería tratar el problema estructural del enorme exceso de capacidad del sector de la pulpa en Indonesia. Las plantaciones ni siquiera son rentables. Según la Alianza del Banco

Mundial y el WWF, "se cree que los ingresos producidos por las plantaciones son insuficientes para atraer inversiones comerciales". Pero la Alianza Banco Mundial/WWF está determinada a rescatar a la industria de la celulosa buscando nuevos subsidios para nuevas plantaciones.

La propuesta de la Alianza Banco Mundial/WWF es una fiesta para consultores. Según la "nota conceptual sobre la actividad" de febrero de 2006, la Alianza contrataría "expertos consultores" y les pagaría un promedio de más de US\$ 2.000 semanales.

Dichos expertos tenían que desarrollar una estrategia y un plan. Tenían que buscar instituciones financieras o mecanismos para crear incentivos para las plantaciones. Tenían que elaborar resultados provisionales y organizar talleres. Tenían que comprometer a los interesados. Tenían que elaborar criterios e indicadores, identificar oportunidades y obstáculos y analizar tendencias futuras y la evolución probable de los mercados.

Los expertos tenían que determinar "las condiciones e intervenciones que ayudarán a mejorar la financiación de las plantaciones basándose en el principio de "El árbol correcto en el lugar correcto por las razones correctas, lo que significa los mercados finales correctos".

Los expertos tenían que "examinar formas de identificar los beneficiarios y los mecanismos financieros que permitirán que los recursos lleguen a los grupos objetivo correctos, participando en las actividades correctas (viables ambiental, social y financieramente) por los motivos correctos (información e interés del mercado) con la financiación correcta".

Los expertos tenían que "centrarse en el establecimiento de medios institucionales para asegurar que los fondos correctos vayan a los proyectos correctos basándose en la información correcta y que la inversión dé los réditos correctos dentro de los plazos correctos".

Los expertos tenían que ser tan expertos como para poder hacer todo esto sin tomarse la molestia de hablar con ninguna de las comunidades afectadas por las plantaciones industriales de árboles. La "nota conceptual sobre la actividad" de la Alianza Banco Mundial/WWF declara que "Más que recoger datos primarios, este estudio de factibilidad debería continuar y sintetizar estudios y análisis previos".

Con este proyecto para subvencionar la industria de la celulosa, la Alianza Banco Mundial/WWF muestra de qué lado está realmente: con la industria de la pulpa y contra la gente.

Por Chris Lang, correo-e : [chrislang@t-online.de](mailto:chrislang@t-online.de), [www.chrislang.blogspot.com](http://www.chrislang.blogspot.com)

[inicio](#)

---

### **- Perú: los depredadores de ayer y de hoy, de la deforestación a las plantaciones**

En el número anterior (Boletín del WRM N° 109) hacíamos referencia a la promoción de las plantaciones de palma aceitera, denunciando sus impactos sobre el bosque amazónico y los campesinos desplazados.

El ímpetu "plantador" continúa, también con otro tipo de exóticas. En julio de este año se presentó el

Plan Nacional de Reforestación, que promueve plantaciones forestales con fines comerciales e industriales, y que fue aprobado en enero del año en curso. El plan se propone un ritmo anual promedio de plantación de aquí al 2024 de 104.500 hectáreas.

En un país en el que se depredaron más de ocho millones de hectáreas de bosques, resulta sumamente irónico que se proponga como paliativo este plan de "reforestación", y ¡por los mismos autores de la depredación!

En efecto, el Plan Nacional de Reforestación fue puesto en marcha por los organismos oficiales –el Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, y el Ministerio de Economía y Finanzas— conjuntamente con empresarios y madereros. En un planteo similar a los aplicados en otros países de la región, se plantea canalizar las inversiones privadas mediante incentivos fiscales, que en este caso el Plan fija en un monto aproximado de 853 millones de dólares, que incluye operaciones de canje de deuda externa por plantaciones. Se define que el pago de incentivos para cada tipo de plantación y el fomento de la inversión privada se hará "a través del desarrollo de un mercado de capitales, que pueda ofrecer líneas de crédito, con períodos de gracia suficientemente amplios (cosecha) e intereses promocionales". El propio grupo forestal Fondebosque así lo anuncia: "Inversiones Forestales Privadas. La Gran Oportunidad" (<http://www.fondebosque.org.pe/boletin/Boletin25.htm>).

Las instituciones financieras internacionales se alinean para facilitar el negocio. El Banco Mundial, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la FAO, figuran entre algunas de las posibles fuentes de cooperación técnica financiera internacional. Por otro lado, dentro de los posibles mecanismos de financiamiento, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) podrían encargarse del endeudamiento, mientras que el Fondo Italo Peruano y la Cooperación Financiera Alemana lo harían con el canje de deuda.

No hay casi restricciones para el negocio, ya que las plantaciones forestales con fines comerciales e industriales, de especies exóticas –eucaliptos y pinos-- pueden ser instaladas en casi todo el territorio nacional, pudiendo ubicarse en suelos agrícolas, forestales o pastizales, incluso en tierras de las comunidades campesinas andinas, a las cuales define que son "quienes poseen la mayor cantidad de tierras con aptitud para el establecimiento de este tipo de plantaciones", cuyos estragos en otros países venimos denunciando profusamente (ver en nuestro sitio: "El problema de las plantaciones forestales", en <http://www.wrm.org.uy/plantaciones/acerca.html>)

Además, el sector forestal ha logrado que recientemente el Congreso aprobara una nueva ley que se enmarca dentro del Plan Nacional de Reforestación, por la cual se pueden adjudicar en concesión tierras deforestadas de dominio público a inversionistas privados para implementar proyectos de forestación y reforestación. Dicha ley ya ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo y solo falta su reglamentación.

Los depredadores de ayer, que se enriquecieron a costa de la destrucción de los bosques peruanos se convertirán ahora –según el discurso oficial- en "forestadores" y "reforestadores" y recibirán por ello cuantiosos recursos desde el Estado. Sin embargo, pese al cambio de título, seguirán siendo los mismos depredadores de siempre, destruyendo con sus monocultivos de árboles suelos, agua, flora y fauna y sumiendo a las poblaciones locales en la miseria.

Plan Nacional de Reforestación, [http://www.inrena.gob.pe/iffs/pnr/proyecto\\_pnr-v151205v1.pdf#search=%22Plan%20Nacional%20de%20Reforestaci%C3%B3n%20per%C3%BA%2](http://www.inrena.gob.pe/iffs/pnr/proyecto_pnr-v151205v1.pdf#search=%22Plan%20Nacional%20de%20Reforestaci%C3%B3n%20per%C3%BA%2)

---

### - Sudáfrica: impactos diferenciados de las plantaciones de árboles sobre las mujeres

La historia de la industria de las plantaciones en Sudáfrica puede compararse con el desarrollo de las plantaciones en otras partes del Sur: en Brasil, Aracruz Celulose creció bajo una dictadura militar; el boom de la celulosa de Indonesia fue planeado y puesto a andar durante el régimen de Suharto; Camboya, Tailandia y Chile son otros ejemplos de cómo la opresión del Estado beneficia a las empresas de la celulosa y las plantaciones.

En Sudáfrica, la fase inicial afectó las tierras controladas por el Estado, de donde se desalojó a las comunidades, que fueron reubicadas en otras zonas tribales, decreto gubernamental mediante. La década de 1980 fue testigo de una ola de nuevas plantaciones encabezada por empresas de celulosa entre las que se destacan Sappi y Mondi. Todo esto ocurrió principalmente en tierras pertenecientes a agricultores blancos. Los costos, sobre todo los salarios y el acceso a la tierra, se mantenían bajos en forma artificial; gracias a esto y al generoso subsidio del gobierno en la época, la industria plantadora local creció hasta convertirse en una importante exportadora de madera y productos derivados de la madera.

Sin embargo, la calidad de vida de las comunidades locales no ha mejorado con la industria de las plantaciones. Los llamados "acuerdos para empoderar a la población de color" ("empowerment deals") y oportunidades de negocios para las comunidades no se difundieron ampliamente, con lo que se convirtieron en fuente de diferenciación y división social. Además, la invasión de las plantaciones madereras industriales ha tenido impactos ambientales que incluyen la destrucción irreversible de praderas y la reducción de la cantidad y la calidad del agua, lo que en la típica vida rural comunitaria es difícil de separar de los asuntos sociales, culturales, económicos y políticos.

Todavía peor situadas en esta situación adversa, las mujeres sufren los impactos diferenciados de varias actividades del sector de las plantaciones madereras industriales que las afectan. Muchos factores resultan en una mayor presión de las plantaciones sobre las mujeres. Estos factores deben interpretarse en el contexto de la división del trabajo de hombres y mujeres definida histórica y culturalmente en una sociedad patriarcal complicada por las políticas económicas coloniales. La vida familiar rural es patriarcal y la autoridad del jefe es indiscutida. El cabeza de familia tomará usualmente las decisiones importantes. El papel de la mujer en estas economías se complica con su falta de participación en otras esferas de la vida. En gran medida, se considera a la mujer más reproductiva que productiva.

Como trabajadoras, productoras de madera o residentes dentro o cerca de una plantación, las mujeres se ven afectadas por la industria de la madera. Salarios diferenciados y la capacidad (o falta de ella) de acceder a empleos calificados o mejor pagos afectan a aquellas mujeres que trabajan. Las productoras de madera se ven afectadas por su capacidad de lograr acceder a tierras apropiadas para garantizar la rentabilidad y de quedarse con los ingresos obtenidos con la venta de la madera o decidir en forma independiente qué hacer con ellos. En teoría, y a menudo también en la práctica, cultivar árboles brinda una salida económica a las mujeres del medio rural que no tienen ninguna otra oportunidad, siempre y cuando tengan acceso a un poco de tierra adecuada. Sin embargo, muchos lotes forestales pertenecen contractualmente a hombres aunque son mujeres

quienes los trabajan. Según cómo funcionen los acuerdos contractuales, los aspectos laborales tienen el potencial de hacer ganar dinero a los hombres mientras las mujeres hacen el trabajo. Muy rara vez este dinero beneficia a las mujeres, niños y niñas que trabajan, pues los hombres consideran que el hecho de que permanezcan en su propiedad es de por sí una paga.

Los problemas relativos a la residencia dentro o cerca de las plantaciones tienen que ver con la seguridad. Las plantaciones cercanas a las viviendas de estas personas han aumentado los problemas de seguridad; hay violaciones y los ladrones esconden su botín en las plantaciones: “Como padres de niñas, las plantaciones nos preocupan mucho. Siempre hay hombres extraños vagando por ahí y se han denunciado muchos delitos sexuales. Por eso las niñas ya no pueden ir a buscar agua o leña. Además, los ladrones se esconden en las plantaciones y ocultan allí las cosas robadas. Cuando la policía descubre esas cosas vienen y nos acosan allanando nuestras casas al estilo apartheid. Aquí no estamos seguros con estas plantaciones”, señaló una mujer local.

Las mujeres dividen su tiempo entre múltiples actividades y las responsabilidades productivas (alimento, disponibilidad de agua y energía para uso doméstico) compiten con las reproductivas (alumbramiento, cuidado y crianza de criaturas). El advenimiento de las plantaciones industriales de árboles en estas comunidades rurales complica el trabajo de nutrición y cuidado realizado por las mujeres. “Como mujer, mi mayor problema es la comida. No estábamos acostumbrados a comprar alimentos en los comercios porque donde vivíamos teníamos campos de porotos y maíz. Había incluso campos para los cultivos del año siguiente. Podíamos rotar los campos cómodamente porque había tierra suficiente. Comprábamos máquinas para moler nuestro propio maíz. Jamás comprábamos harina de maíz. Esas son algunas de las cosas que nos recuerdan de dónde venimos”.

La industria de la madera ha sido calificada con justicia de “principal ladrona de agua”. La cuestión del agua y las plantaciones madereras es muy importante en un país como Sudáfrica, donde el agua es escasa y también muy importante para las comunidades rurales a quienes se adjudicó esas tierras por no considerárselas suficientemente buenas para la agricultura y el asentamiento de los europeos. En la provincia de KwaZulu-Natal, las sedientas plantaciones madereras se sitúan a menudo arriba, en las zonas de acumulación de agua, en detrimento de los usuarios de aguas abajo. En ciertas zonas de comunidades rurales la pérdida de aguas superficiales tiene graves implicaciones negativas para la capacidad de supervivencia de la gente. Las plantaciones hacen desaparecer fuentes, lagunas y pequeños cursos de agua, lo que obliga a la gente a mudarse a zonas marginales ecológicamente sensibles en busca de agua para sus animales y huertas. Además, cuando el agua escasea son las mujeres que tienen que caminar más para encontrarla. Son las mujeres que tienen que levantarse mucho más temprano para traer el agua para la casa.

Una mujer mayor de Sabokwe, la señora Ziqubu, expresó: “El asunto es que competimos con estas plantaciones por el agua. Gastan un montón de agua. Me acuerdo de cuando llegamos aquí en 1996, el arroyo cerca de nuestro jardín corría continuamente porque los eucaliptos no estaban. Este terreno que va desde aquí hasta la ruta era pradera. La empresa temía que plantáramos nuestros cultivos y construyéramos nuestras casas en ese terreno, por eso rápidamente lo llenaron de árboles. Desde entonces, el agua escasea. Esta tierra, que antes teníamos que drenar porque era pantanosa, se ha vuelto seca. Para regar los cultivos hacíamos pozos muy poco profundos. Ahora tenemos que cavar más hondo y traemos el agua de muy lejos. El agua para beber también se ha vuelto escasa. También tenemos que traer agua para nuestro ganado, aves y cabras, además del agua para el consumo doméstico. Esto hace que el trabajo de las mujeres sea todavía más duro. Tenemos una huerta cooperativa manejada por mujeres de esta comunidad que cercamos gracias a la ayuda del Departamento de Agricultura, pero nos enfrentamos con grandes problemas a la hora del riego.

Traemos el agua en baldes sobre la cabeza, pero el proyecto de huerta incluye a mujeres muy mayores. Esta no es forma de vivir y trabajar. El problema del agua es tan crucial como el propio acceso a la tierra. Se pueden obtener tierras, pero sin agua se puede hacer muy poco con ellas. Así que aquí estamos, en el medio de un desierto creado por la industria de las plantaciones. Pensar que ni siquiera ayudan a perforar pozos, construir molinos o usar otras tecnologías para obtener agua. Por eso dije antes que somos nosotras las que tenemos que pagar los costos de los impactos de esta industria desconsiderada”.

Extraído y adaptado de: A Study of the Social and Economic Impacts of Industrial Tree Plantations in the KwaZulu-Natal Province of South Africa, John Blessing Karumbidza, WRM, diciembre de 2005 <http://www.wrm.org.uy/countries/SouthAfrica/book.pdf>

[inicio](#)

---

## LO PEOR EN CERTIFICACIÓN DE PLANTACIONES

### - PEFC: respaldo a sistemas de certificación no creíbles en el Sur

El PEFC fue establecido entre 1998 y 1999 por sectores forestales nacionales –principalmente asociaciones de pequeños propietarios de bosques en varios países europeos- bajo el nombre de Esquema Paneuropeo de Certificación Forestal (Pan European Forest Certification Scheme). El cambio a su nombre actual (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Programa para Avalar Esquemas de Certificación Forestal) ocurrió luego que diera su aval a otros sistemas no europeos. El sistema es gobernado por el Consejo del PEFC, integrado por representantes de sistemas nacionales de certificación que integran el PEFC. No se trata de un solo sistema de certificación con una única norma sino de un programa para avalar sistemas nacionales de certificación.

Si bien se suponía que el PEFC certificaría el manejo de bosques, ha incluido también las plantaciones de árboles en tanto “bosques” certificables, tal como ha ocurrido con otros sistemas de certificación.

El PEFC tiene una cantidad de características que lo convierten en el sello perfecto para plantaciones insustentables en el Sur, como puede verse en los dos artículos siguientes sobre la certificación en Chile y Brasil.

Al respecto, un informe de FERN (2004) afirma que “En ninguna norma del PEFC se reconocen los derechos indígenas”, lo que “preocupa especialmente, pues el PEFC pronto incorporará sistemas en zonas tropicales, donde los asuntos relacionados con los derechos indígenas y los derechos a la tierra plantean graves inquietudes”. Esto ya ha sucedido.

En su informe, FERN también consideró que “El no reconocimiento pleno de los derechos a la tierra de los pobladores locales por parte del PEFC es una omisión grave, y lo mismo ocurre con la no exigencia de consultas adecuadas con los interesados locales durante el proceso de certificación. Esto tiene particular importancia dado que el PEFC comenzará a respaldar sistemas no europeos en países donde la discusión sobre el derecho a la tierra y la reforma de las leyes forestales es la clave para un mejor manejo de los bosques. Si no reconoce este asunto, el PEFC corre el grave riesgo de ser atacado por una amplia gama de organizaciones sociales y ambientales de esos países y



también del Norte”.

Esta inquietud se ha convertido en realidad: plantaciones en Chile y Brasil muy combatidas por los pueblos indígenas cuyas tierras fueron tomadas por las empresas de plantaciones han recibido una certificación avalada por el PEFC. La única razón por la que el PEFC no ha sido “atacado” en el Sur es que los sistemas de certificación que ha respaldado tienen tan poca credibilidad que ni siquiera han ameritado la atención de las organizaciones que luchan contra las plantaciones.

El informe de FERN declara también que el PEFC “todavía no ha cambiado los fundamentos del sistema adoptando la participación igualitaria de los diferentes grupos interesados. Todavía sigue dando predominio a la industria forestal y a los propietarios de bosques en cuanto al desarrollo del programa y de las normas. Por lo tanto, no es un sistema independiente. Además, “No se requiere consultar a los interesados durante el proceso de certificación, aunque algunos planes nacionales han llevado a cabo consultas con los interesados”. Para empeorar las cosas, “no en todos los casos se exigen visitas de campo”.

Lo anterior significa que en países como Chile y Brasil las mismas empresas plantadoras que serán certificadas son las que establecen las normas, que no existen las consultas adecuadas y que ni siquiera se necesitan visitas de campo, o por lo menos visitas de campo significativas.

Como expresa FERN, “el umbral para el aval es tan bajo que la mayoría de los sistemas de certificación resultan aptos”. Esto ha demostrado ser cierto.

A este respecto, FERN afirma que “PEFC Francia, no tiene normas mínimas de desempeño claras, no certifica a nivel de Unidades de Manejo Forestal ni exige visitas de campo” y advierte que “Esto no presagia nada bueno para los bosques certificados a través de sistemas de certificación tropicales que hoy quieren acceder al PEFC”. Esto también ha demostrado ser cierto: cientos de miles de hectáreas divididas en miles de unidades de manejo (que los certificadores nunca visitaron) hoy están siendo certificadas en Chile y Brasil a la sombra del PEFC.

En suma, el aval del PEFC puede tener credibilidad en unos pocos países europeos, pero en los dos sistemas que se analizan a continuación (CERFLOR y CERTFOR) se ha convertido simplemente en una herramienta para brindar acceso a los mercados a algunos de los peores tipos de monocultivos de árboles a gran escala, social y ambientalmente perjudiciales.

- FERN (2004).- Footprints in the forest. Current practice and future challenges in forest certification. [http://www.fern.org/media/documents/document\\_1890\\_1900.pdf](http://www.fern.org/media/documents/document_1890_1900.pdf)

inicio

---

### **- Brasil: el programa de certificación CERFLOR no merece la más mínima credibilidad**

El programa de certificación forestal brasileño CERFLOR, avalado por el programa internacional PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), fue lanzado oficialmente en 2002 por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio y comenzó a funcionar en marzo de 2003.

CERFLOR tiene cinco principios --acompañados de criterios e indicadores--, que varían según las condiciones locales. Se pone mucho énfasis en los planes de gestión, los ejercicios de monitoreo y



los planes de desarrollo para las comunidades locales, pero no hay requisitos sociales y ambientales mínimos y claros en cuanto al desempeño. Los requisitos sociales no van más allá de lo que se exige por ley. No hay exigencias de autodeterminación de los pueblos indígenas y tampoco ONGs o representantes de grupos indígenas o locales que participen en la elaboración de las normas de CERFLOR.

Más allá de los principios, criterios e indicadores, lo que importa es ver como actúa en la práctica concreta. En este sentido, el caso de la certificación de Aracruz Celulose es más que revelador. En efecto, CERFLOR ha certificado el "manejo forestal" de todas las plantaciones de la empresa Aracruz en los estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia y Espirito Santo.

Es interesante señalar que en el caso de las plantaciones de esta empresa en Rio Grande do Sul, la disputa de tierras con las comunidades indígenas del lejano estado de Espirito Santo le generó tanto desprestigio a nivel internacional que la propia empresa decidió solicitar el retiro voluntario de la certificación del FSC (Forest Stewardship Council) de sus plantaciones en el Estado de Rio Grande do Sul, antes de su revalidación, en diciembre de este año (ver Boletín N° 107 del WRM). Esas mismas plantaciones ahora han recibido el certificado de CERFLOR.

El caso de las plantaciones de Aracruz en Espirito Santo es aún más grave. En dicho estado, la empresa es propietaria de 146.000 hectáreas de tierras, de las cuales 93 mil hectáreas están cubiertas con monocultivos de eucalipto. La certificación de esas plantaciones por parte de CERFLOR parece hasta algo provocadora para todos los que conocen de cerca la actuación y postura de los dirigentes de la empresa con las comunidades locales y su ambiente, a lo largo de los últimos 35 años.

La Red Alerta contra el Desierto Verde cita algunos ejemplos de conflictos, algunos más antiguos, otros más recientes:

"Aracruz Celulose continúa ocupando aproximadamente 10.500 hectáreas de tierras indígenas Tupinikim y Guaraní en el municipio de Aracruz. Son tierras que ya fueron reconocidas como indígenas por el gobierno federal, aunque fueron excluidas de la última demarcación, ocurrida en el año 1998. En ese momento, el propio gobierno federal, presionado por Aracruz Celulose, cometió un acto ilegal al reducir la tierra a ser demarcada. Resta entonces preguntar: ¿cómo certificar a una empresa que ocupa y explota tierras indígenas?"

Aracruz Celulose invadió las tierras de quilombolas (descendientes de esclavos) en el Norte del Estado de Espirito Santo, expulsando a miles de personas y plantando eucaliptos. En los últimos años, 34 comunidades de quilombolas están en un proceso de rearticulación y reorganización para garantizar su reconocimiento, la devolución y la demarcación de sus tierras, contando con el apoyo de la Fundación Palmares, del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) y de la sociedad civil organizada.

Aún así, CERFLOR certificó a una empresa que ocupa y explota tierras de comunidades quilombolas. A habitantes de Vila do Riacho que hacían carbón con los restos de eucalipto de Aracruz les destruyeron sus hornos en una acción articulada entre la Intendencia de Aracruz, la empresa, policías y la 'milicia armada' de la empresa Aracruz, Visel. Los residuos del eucalipto – restos de gajos y troncos- constituyen la única fuente de supervivencia para comunidades que fueron privadas de su modo de vida. Actualmente esta empresa es considerada ambientalmente correcta porque tiene una máquina que tritura estos restos para que el material orgánico sea reincorporado en la tierra. Sólo falta que Aracruz gane un premio ambiental con eso... Ahora, ¿cómo certificar a una

empresa que deja a familias sin tierra, de quilombolas y de indios sin su única fuente de supervivencia, dejándolas pasar hambre?

En octubre de 2004, Aracruz destruyó cuatro casas de habitantes en un área de Barra do Riacho, cerca de su complejo industrial. Luego de la destrucción de las casas quedó comprobado en la justicia que las familias vivían en el lugar hacía más de 10 años. Brutalmente Aracruz destruyó las casas y arrancó todas las plantaciones de banana, mandioca y ananá. ¿Es esa una empresa que merece recibir un certificado de manejo forestal mientras continúa realizando actos de violencia contra los habitantes locales, igual que lo ha hecho contra los indios, quilombolas y pequeños productores a lo largo de los últimos 35 años, incluso con el apoyo de la dictadura militar?"

Las organizaciones, movimientos, comunidades y ciudadanos de la sociedad civil consideran que CERFLOR no merece la más mínima credibilidad. La sociedad civil fue explícitamente excluida de la discusión sobre los objetivos, principios y criterios de este sistema de certificación. Como denuncia la Red Alerta contra el Desierto Verde: "Hasta hoy, ni sabemos cuáles son los principios y criterios que la empresa certificadora BVQI va a utilizar en este proceso de certificación y si quisiésemos hacerlo, debemos comprar la documentación relativa al procedimiento de certificación establecido por CERFLOR, lo que lo caracteriza como no transparente. Además de ello, no existen exigencias sociales o ambientales mínimas relacionadas con el certificado CERFLOR. La referencia es básicamente la legislación brasileña."

Pero, como señala la Red Alerta contra el Desierto Verde, "un monocultivo industrial en gran escala, nunca puede ser certificado por ser insustentable. La plantación de eucalipto es 'sustentable' solamente para Aracruz, que aumenta su productividad a costa de un elevado consumo y de la contaminación de los recursos hídricos, de la muerte de peces y de animales y de tantos otros impactos socioambientales que involucran a comunidades indígenas, quilombolas y de pequeños productores que desde siempre han habitado la región que se ha vuelto conocida actualmente como Desierto Verde. Su modo de vida fue modificado en provecho de Aracruz, que destruyó la Mata Atlántica, acabando de esta forma con la fuente de una verdadera sustentabilidad para estas comunidades.

Las comunidades locales están cansadas de los impactos producidos por el monocultivo del eucalipto. Quieren alternativas basadas en la producción de alimentos en la tierra mediante una amplia reforma agraria, quieren reforestación con especies que mejoren el medio ambiente local y ofrezcan múltiples opciones de uso, los indios y quilombolas quieren que les devuelvan sus tierras y principalmente, todos quieren que sus derechos fundamentales sean respetados.

La Red Alerta contra el Desierto Verde denuncia a CERFLOR y a su equipo técnico, encargado de la elaboración del informe para la certificación de Aracruz Celulose en el Estado de Espírito Santo. Sin ninguna comunicación previa, este equipo, acompañado por dos funcionarios de Aracruz Celulose, apareció en la aldea guaraní Boa Esperança el 30/11/04, interrumpiendo una reunión de la comisión de Caciques y Líderes Tupinikim/Guaraní. Ángel Rafael, profesor universitario, ex pasante de Aracruz Celulose y de Mannesman, con estudios en los Estados Unidos de América, habló en nombre del equipo de CERFLOR, explicando que Aracruz Celulose todavía traía la ranciedad de la época de la dictadura militar en la que el Estado poseía la mayor parte de las acciones de la empresa. Sin embargo, con la certificación que pretendía, podría revertir los eventuales impactos negativos causados hasta ahora. La certificación sería, según él, un estímulo para que de ahora en adelante, Aracruz asumiese las responsabilidades que eventualmente pudiese estar incumpliendo. Asimismo, según el profesor, la plantación de eucaliptos sería beneficiosa para la población de Espírito Santo, porque estaría sirviendo para la fabricación de muebles, libros, cuadernos y otros

productos de consumo de la población. El eucalipto sería entonces comparable con las plantaciones de mandioca, maíz y poroto...

Cuestionado sobre esas afirmaciones y confrontado con datos que lo desmentían, el profesor Ângelo Rafael se retiró intempestivamente de la cabaña guaraní hacia su auto. La otra señora, integrante del equipo, que se decía antropóloga, todavía permaneció algunos minutos intentando argumentar a favor de la empresa."

Paulo, líder Tupinikim, cuestionó a los especialistas diciendo: "¿a qué llaman bosque ustedes? Para nosotros las plantaciones no son bosques. Nuestro concepto de bosque es diferente al de los científicos... Para nosotros el bosque no se planta para después cortarlo. El bosque es el lugar donde nosotros vamos a buscar el material para las artesanías, la caza, los frutos y a pescar los peces en los ríos... Nuestra condición para que la empresa reciba la certificación es que ella devuelva en primer lugar las once mil hectáreas de nuestra tierra que están en su poder". Y hablando en nombre de los indios, el cacique más anciano cerró la conversación diciendo: "Ustedes están haciendo su trabajo... pero si supiesen las desgracias que la empresa causó por aquí, no harían este trabajo, no... Yo no podría hacerlo. Lo que la empresa hizo por aquí fue un delito. Eso es lo que la empresa es, una delincuente. Les decimos que nosotros, indios, no estamos de acuerdo con que se le dé esa certificación."

A pesar de todo esto, CERFLOR ha certificado todas las plantaciones de Aracruz. Resulta entonces evidente que el programa de certificación CERFLOR no merece la más mínima credibilidad.

Artículo basado en: "Carta pública da Rede Alerta contra o Deserto Verde sobre a certificação CERFLOR da Aracruz Celulose no Espírito Santo" y "Aracruz Celulose: CER-FLOR que não se cheira", comunicados de la Red Alerta contra el Desierto Verde, 2005; "Footprints in the forest. Current practice and future challenges in forest certification", 2004, FERN

[http://www.fern.org/media/documents/document\\_1890\\_1900.pdf](http://www.fern.org/media/documents/document_1890_1900.pdf)

All Aracruz forests now fully certified by Cerflor

<http://www.aracruz.com.br/web/en/imprensa/noticias/noticias177.htm>

Aracruz requests voluntary temporary withdrawal of FSC certification of its Guaíba Unit

<http://www.aracruz.com.br/web/en/imprensa/noticias/noticias178.htm>

[inicio](#)

---

### - Chile: ¿tiene algún valor el sello CERTFOR?

En el año 2000 los empresarios forestales chilenos anunciaron el lanzamiento de su propio sello de certificación forestal, CERTFOR. Este sello se creó bajo los auspicios de la Fundación Chile, el Instituto Forestal (Infor) y con el apoyo financiero de CORFO (Corporación de Fomento de la Producción). Habiendo intentado incorporarse al FSC --en aras de buscar legitimidad internacional-- y frente a la negativa recibida, CERTFOR acudió a otro sistema internacional de certificación: el PEFC. Fue así que en octubre del 2004, el sistema de certificación Chileno CERTFOR, fue homologado internacionalmente por PEFC.

Las empresas certificadoras acreditadas para realizar las auditorias son QMI Toronto y SGS. Resulta sorprendente que esta última está también acreditada en el sistema FSC y que ha sido reiteradamente cuestionada por su certificación de plantaciones bajo ese sistema. ¿Se le habrán

mezclado los manuales de procedimiento?

Hasta el momento CERTFOR ha certificado siete operaciones forestales en Chile, que abarcan un total de nada menos que 1.600.000 hectáreas certificadas. Entre las mismas se encuentran las gigantescas plantaciones de los dos grupos más poderosos de Chile: el Grupo Arauco y el Grupo Mininco.

El sistema cuenta con 9 principios acompañados de una serie de criterios e indicadores. Más allá de estos principios e indicadores, es importante destacar que CERTFOR es capaz de certificar de una sola vez todas las plantaciones de un grupo empresarial. Tal es el caso de Bosques Arauco, empresa a la cual en un solo certificado se le otorgó el sello para 280.000 hectáreas distribuidas en 950 predios. Lo mismo sucedió para el caso de Forestal Celco y Forestal Cholguán (también del Grupo Arauco) a las que se les otorgó el sello para 446.100 hectáreas distribuidas en 2150 predios. Demás está decir que los certificadores recorrieron apenas una pequeña fracción de todos esos predios, lo que ya está mostrando a las claras la poca seriedad del sistema.

Entre sus principios, el sello CERTFOR no dice una sola palabra en relación al uso de árboles transgénicos, por lo que no sería extraño que en el futuro también certificara plantaciones transgénicas. Tal vacío tiene una explicación muy sencilla: Fundación Chile –una de las creadoras de este sello- es una de las organizaciones que ha estado más activamente involucradas en ingeniería genética de árboles.

Más allá de la teoría, la propia práctica aporta elementos más que suficientes para señalar que ninguna de estas plantaciones debieran haber sido jamás certificadas ... ¡por nadie!

En primer lugar, el modelo forestal chileno, fue impulsado durante la dictadura de Pinochet, y se expandió sobre los territorios que históricamente han pertenecido a pueblos indígenas de Chile: el Pueblo Mapuche.

Están hartamente documentados los impactos provocados por la fuerte expansión de las empresas forestales en el sur de Chile: la destrucción del bosque nativo, la pérdida de los recursos hídricos y contaminación de los mismos por el uso de agroquímicos, erosión descontrolada, destrucción de la biodiversidad, disminución e incluso desaparición de la fauna silvestre y de la vegetación, problemas de salud en las poblaciones locales por el uso de agrotóxicos, por citar solo algunos.

Pero fundamentalmente en Chile, el “desarrollo forestal” ha provocado severos impactos al Pueblo Mapuche. No es casual, que el incremento en el empobrecimiento de la población mapuche coincide con la concentración de plantaciones forestales. Las localidades forestales con alto índice de demografía mapuche entre la VIII y IX regiones, a pesar de los millones de dólares por utilidades que perciben las compañías, son lugares donde se concentran los mayores niveles de indigencia y pobreza.

El avance del modelo forestal chileno está provocando el etnocidio del Pueblo Mapuche, argumento suficientemente importante como para no poder certificar nunca a una empresa forestal chilena que actúa en esos territorios. Sin embargo los certificadores de CERTFOR no parecen estar siquiera enterados del problema.

Los principales focos de conflictos por reivindicaciones territoriales que mantienen las comunidades Mapuche son con empresas forestales, principalmente con Forestal Mininco y con las empresas que agrupa Bosques Arauco, generando centenares de detenidos, procesados y condenados; decenas

de heridos; cientos de movilizados, como saldo y resultado de múltiples movilizaciones tendientes a la recuperación de tierras y también con el fin de frenar la expansión y las graves consecuencias que se denuncian en contra de las empresas forestales.

Incluso más, el pueblo Mapuche tuvo que lamentar la muerte de dos jóvenes que en movilizaciones por la recuperación de sus tierras, que fueron brutalmente asesinados por la guardia de la forestal Mininco. ¿Cómo pudo entonces CERTFOR darle un sello a Forestal Mininco para sus 540.766 hectáreas?

En síntesis, el sello CERTFOR es una burla a los consumidores y una afrenta a las comunidades Mapuche que sufren los graves impactos de estas plantaciones. Nos permitimos entonces hacer una pequeña sugerencia: que sustituyan el pino de su logo por una calavera con un par de tibias cruzadas. No quedaría tan bonito, pero reflejaría mejor la realidad.

Artículo elaborado en base a: CERTFOR, <http://www.CERTFOR.org>; Defensores del Bosque Chileno, <http://www.elbosquechileno.cl/41fsc.html>; "Modelo forestal chileno y Movimiento autónomo Mapuche: Las posiciones irreconciliables de un conflicto territorial" por Alfredo Seguel, [http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/modelo\\_forestal\\_chileno.html](http://www.wrm.org.uy/paises/Chile/modelo_forestal_chileno.html); Boletines anteriores del WRM, disponibles en <http://www.wrm.org.uy/paises/Chile.html>

[inicio](#)

---

## ÁRBOLES GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

### **- Recolección de firmas para que la CBD prohíba la liberación de árboles genéticamente modificados**

La última Conferencia de las Partes (COP8) de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) adoptó una importante Decisión (VIII/19) mediante la cual "Recomienda a las Partes adoptar enfoques de precaución al tratar la cuestión de los árboles genéticamente modificados"

La Decisión reconoció "las inexactitudes [incertidumbres] relacionadas con los impactos ambientales y socioeconómicos potenciales, incluyendo los impactos a largo plazo y los transfronterizos, de árboles modificados genéticamente sobre la diversidad biológica de los bosques a nivel global, así como los medios de subsistencia de las comunidades indígenas y locales, y dada la ausencia de datos confiables y de la capacidad en algunos países para llevar a cabo evaluaciones de riesgo y evaluar esos posibles impactos".

Este es un paso muy importante en la dirección correcta, que necesita ser apoyado para contrarrestar las presiones que recibirá la CBD por parte de los actores involucrados en la producción y venta de árboles genéticamente modificados.

Dado que la Decisión de la COP 8 invita a todos "a ofrecer opiniones e información pertinente a la Secretaría para su inclusión en la evaluación" varias organizaciones han elaborado una carta conjunta para ser enviada al Secretariado que contiene información y análisis sobre el tema y hace un llamado a la CBD para que declare "en forma inmediata la prohibición de liberación de árboles genéticamente modificados".

La carta finaliza diciendo que: "los árboles GM no tienen ningún papel a jugar en la conservación de la diversidad biológica de los bosques, y por el contrario, probablemente reduzcan la biodiversidad, con las correspondientes consecuencias sociales. Los altos riesgos señalados por la ciencia disponible, aunque incompleta, muestran que la tecnología puede resultar en la extinción de especies de flora y fauna del bosque, con severos impactos sobre la biodiversidad" y urge a la CBD para que avance "hacia una Decisión obligatoria, declarando en forma inmediata la prohibición de liberación de árboles genéticamente modificados..

El texto completo de la carta se encuentra disponible en:

<http://www.wrm.org.uy/temas/AGM/cartaCBD.html>

Si desea adherir a esta carta, por favor envíe un mensaje a STOP GE Trees, email:

[info@stopgetrees.org](mailto:info@stopgetrees.org) antes del 15 de Noviembre!

[inicio](#)

**Boletín Mensual del Movimiento Mundial por los Bosques**  
**Este boletín también está disponible en inglés, francés y portugués**  
**Editor: Ricardo Carrere**

**Movimiento Mundial por los Bosques**  
**Maldonado 1858 - 11200 Montevideo - Uruguay**  
**tel: 598 2 413 2989 / fax: 598 2 410 0985**  
**[wrm@wrm.org.uy](mailto:wrm@wrm.org.uy)**  
**<http://www.wrm.org.uy>**

